

Crisis Económica y Revolución del 68 en Alicante: la Configuración de una Coyuntura Revolucionaria

ROSA ANA GUTIÉRREZ LLORET
Universidad de Alicante

RESUMEN.—La revolución de 1868 se sitúa en un contexto de crisis en el que se entrelazan la quiebra del sistema político isabelino y la recesión económica. El estudio de esta crisis económica en su doble vertiente: financiero-comercial y de subsistencias en Alicante, nos permite analizar el proceso de configuración de una coyuntura revolucionaria y del bloque social que hizo posible la revolución.

PALABRA CLAVE: 1864-1868, Alicante (España), Revolución, Crisis Económica.

ABSTRACT.—The Spanish revolution in 1868 takes place in a context of crisis in which the break up of Isabelline political system and the economic recession are intertwined. The study of this financial crisis in its double aspect: financial-commercial and subsistence in Alicante allows us to analyse the process of configuration of a revolutionary situation and of the social group which made the revolution possible.

KEY WORDS: 1864-1868, Alicante (Spain), Revolution, Financial Crisis.

La revolución de Septiembre y la nueva etapa política que con ella se inaugura —el sexenio democrático— se sitúan en el contexto de la quiebra irreversible del modelo polí-

Anales de Historia Contemporánea, 10 (1994)



tico moderado, incapaz a todas luces de integrar a fuerzas políticas que, como el progresismo, representan las nuevas realidades sociales y económicas resultantes de los procesos de transformación capitalista de la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, no es menos cierto que, en coincidencia con la crisis política, se manifestó una profunda recesión económica que, de acuerdo con los ya clásicos trabajos de los profesores Tortella Casares y Sánchez Albornoz¹, responde a factores estructurales, pero que actúa coyunturalmente favoreciendo la participación de diversos sectores y clases sociales en el movimiento septembrino. En este sentido, no podemos olvidar que una de las singularidades del 68 en las coyunturas revolucionarias del siglo XIX radica en la participación popular² y que ésta viene motivada básicamente por reivindicaciones económicas. Además, la crisis económica no sólo actúa como motor revolucionario, sino que condiciona claramente algunos aspectos de la propia evolución del sexenio, por lo menos en sus primeros años.

Al igual que otras provincias y ciudades de la periferia peninsular, Alicante participará activamente en la conspiración y posterior estallido revolucionario de septiembre de 1868 y resulta indudable que la crisis económica también dejó sentir sus efectos en estas tierras favoreciendo la ampliación del bloque social y político septembrino y el triunfo revolucionario. Por ello, nos parece idónea la elección de este ámbito reducido, pues nos permite analizar de forma más concreta la morfología de la recesión, sus efectos y consecuencias en relación con la coyuntura del 68, en especial la articulación de las fuerzas sociales participantes.

1. La crisis económica, 1864-1868

A mediados del siglo XIX la provincia de Alicante seguía siendo eminentemente agraria, a excepción del islote industrial constituido por Alcoy y su comarca³. La pauta de la economía provincial la marcaba la capital, en particular la intensa actividad comercial en torno al puerto. La vocación mercantil de la ciudad de Alicante, consoli-

1 La crisis económica de 1866-68, en su doble vertiente financiera y de subsistencias, se puede considerar como la manifestación de una crisis estructural motivada por el atraso del desarrollo capitalista en España. Vid. al respecto, N. SÁNCHEZ ALBORNOZ, «El trasfondo económico de la revolución», en *Revista de Occidente*, VII, nº 67, 1968, pp. 39-63; y G. TORTELLA CASARES, «Ferrocarriles, economía y revolución», en *La revolución de 1868. Historia, pensamiento y literatura*, New York, 1970, pp. 126-137.

2 Aunque algunos autores como J. A. GÓMEZ MARÍN («Alcance de los movimientos sociales en la revolución de 1868», en *Atlántida*, VI, 1968, pp. 566-588) y A. EIRAS ROEL, («Nacimiento y crisis de la democracia en España: la revolución de 1868», en *Cuadernos Hispanoamericanos*, nº 231, 1969, pp. 592-627) han cuestionado la importancia de la participación popular sobrevalorando el protagonismo militar, lo cierto es que ésta contribuyó decisivamente al triunfo revolucionario.

3 Sobre las características generales de la economía alicantina de la primera mitad del s. XIX, vid. G. SÁNCHEZ RECIO, «Inicios del capitalismo y desarrollo económico», en *Historia de la provincia de Alicante*, Murcia, 1987, tomo V, pp. 105-146.

dada ya en la centuria precedente⁴, se combinaba con una actividad agraria en la huerta que la rodeaba especializada en cultivos de tipo mediterráneo destinados a la exportación como la vid, mientras que la industria presentaba un escaso desarrollo dado su lento crecimiento y marcado carácter artesanal⁵.

En los años cincuenta, tras el marasmo económico de las cuatro primeras décadas del ochocientos, se inaugura en España una fase expansionista estrechamente ligada a la creación del sistema bancario y a la construcción de las principales líneas de la red ferroviaria⁶. En Alicante la nueva coyuntura se dejará sentir de forma extraordinaria al coincidir con la construcción del ferrocarril Alicante-Madrid y la apertura de una sucursal del Banco de España. Las buenas expectativas que para el desarrollo económico local auguraban estos dos acontecimientos se cumplieron en gran medida pues, aunque carecemos todavía de estudios pormenorizados sobre esta cuestión, los indicadores que poseemos señalan un notable crecimiento demográfico⁷ y un incremento de la actividad comercial⁸.

Esta etapa de expansión se vio truncada por la recesión de 1866, una crisis decenal que se inserta en un ciclo alcista que abarca de 1848 a 1873. Mientras que en los países más desarrollados la crisis está ligada al fenómeno de superproducción, en los que se está produciendo un limitado proceso de industrialización de carácter sectorial o regional tendrá otras características. En España se manifiesta como una paralización del proceso industrializador afectando de manera primordial a uno de sus principales sectores: la construcción ferroviaria. En 1864, con la finalización del tendido ferroviario, aparecen signos de contracción económica que se agravará en los años siguientes. Los bajos rendimientos de las líneas en explotación ponen de manifiesto el fracaso del ferrocarril como motor del desarrollo económico y la debilidad estructural del crecimiento de los años precedentes⁹.

4 E. GIMÉNEZ LÓPEZ, *Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria*, Valencia, 1981.

5 La única entidad fabril de una cierta envergadura era la Fábrica de Tabacos que hacia 1883 llegó a emplear a unas cinco mil operarias. E. MANERO, *Estudios sobre topografía médica de Alicante*, Alicante, 1883, p. 7.

6 Todo ello resultado de la legislación del Bienio progresista: Ley de Ferrocarriles de 1855 y leyes bancarias de 1856. Vid. G. TORTELLA CASARES, *Los orígenes del capitalismo en España*, Madrid, 1975, p. 168 y ss.; A. GÓMEZ MENDOZA, *Ferrocarril, industria y mercado en la modernización de España*, Madrid, 1989, p. 23 y ss.; J. B. VILAR, *El despegue de la Revolución industrial española, 1827-1869*, Madrid, 1990, pp. 67-92 y 347-360; J. NADAL, *Moler, tejer y fundir. Estudios de Historia Industrial*, Barcelona, 1992, pp. 306-327.

7 En el primer período intercensal (1857-1860) el crecimiento demográfico registrará un índice anual del 4'37%. Cfr. V. GOZALVEZ PÉREZ, «Notas sobre la demografía de la provincia de Alicante», en *Cuadernos de Geografía*, nº 11, pp. 149-198, p. 159.

8 En 1860 entraron en el puerto alicantino 3.026 buques con cabida para 313.821 tn.; en el quinquenio siguiente el número de buques descenderá pero se mantendrá el tonelaje (Cfr. *Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País*, Alicante, nº 2, abril de 1881, p. 39). Otro dato significativo es el relativo a la exportación en el año 1863 que representó, según la Aduana de Alicante, un valor total de 41.030.356 rs. (Archivo Histórico Nacional, *Sec. de Hacienda*, leg. 2.238).

9 TORTELLA CASARES, «Ferrocarriles, economía y revolución», p. 136.

La inversión de la tendencia expansionista en la economía española tendrá un reflejo temprano en una ciudad tan vinculada al comercio portuario como es Alicante. En este contexto es revelador que apenas un año antes, en 1863, la sucursal de la *Sociedad General Española de Descuentos* que se había establecido en la ciudad en 1860 como sociedad de giro y banca¹⁰ comience a presentar problemas que contribuirán, en parte, a su quiebra con los primeros embates de la crisis en octubre de 1864¹¹. En el memorial de quejas presentado a la Reina por varios accionistas de Alicante –entre los que se encontraban algunos comerciantes como Pascual Puerto, José y León Raymundo, José Vicient y Andrés Leveroni– se criticaba, junto a la no amortización de los gastos de instalación y el reparto del capital por utilidades que ocasionaba pérdidas a la compañía y privaba a los accionistas de los intereses anuales, la mala administración de la sucursal y la compañía, que había comprometido más de un millón de reales en negociaciones de letras¹². Las dificultades de la sucursal alicantina eran ya un síntoma de una crisis financiera que iba a afectar en primer lugar a determinados núcleos de pequeños inversores y comerciantes.

El sector comercial y portuario, puntal de la economía alicantina, va a percibir las primeras manifestaciones de la crisis pues, si bien el estudio de la balanza comercial española realizado por J. Lacomba¹³ le ha llevado a relativizar los efectos de la crisis en el ámbito comercial, aquellos puertos que comerciaban con Francia y Gran Bretaña se verán afectados en sus transacciones ya que los dos polos de la crisis serán las capitales financieras de estos países: Londres y París¹⁴. En la prensa y en las actas municipales son constantes las referencias a la paralización comercial, aunque no contamos con documentación suficiente para evaluar su dimensión exacta¹⁵. En 1866 tiene lugar la inflexión crítica con el colapso de la banca y el desmonte del sistema crediticio en Madrid y Barcelona, sucediéndose a partir de entonces una oleada de quiebras por todo el país que, lógicamente, tendrían que repercutir en un sector tan sensible a la coyuntura financiera como es el comercial.

10 La *Sociedad General Española de Descuentos* había sido fundada por la *Compañía General de Crédito* y era dueña asimismo de la fábrica de gas instalada en Alicante en 1860. Cfr. TORTELLA CASARES, G., «La evolución del sistema financiero español de 1856 a 1868», en *Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX*, Madrid, 1970, pp. 17-145, p. 121.

11 N. SÁNCHEZ ALBORNOZ, «La formación del sistema bancario español, 1856-1868», en *Jalones en la modernización de España*, Barcelona, 1975, pp. 15-79, pp. 34 y 35.

12 *Exposición que han elevado a S. M. la Reina por conducto del Sr. Gobernador Civil de esta provincia varios accionistas de la Sociedad General Española de Descuentos*, Alicante, 1863.

13 J. A. LACOMBA, *Introducción a la historia económica de la España contemporánea*, Madrid, 1972, p. 190.

14 El origen de la crisis fue la quiebra de la firma londinense Overend & Gurney. Cfr. J. SARDÁ, *La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX*, Madrid, 1948, pp. 147-148.

15 Si observamos las estadísticas referentes a la entrada de buques por el puerto alicantino podrá comprobarse una reducción tanto del número de buques como de su tonelaje desde 1865 que alcanzará su punto más bajo en los años 1870 y 1871. Vid. *Boletín de la Sociedad Económica...*, (vid. nota 8).

Desde el año 1866 se producirá una crisis agrícola que al coincidir con la comercial y financiera agravará la coyuntura depresiva general. En su vertiente de subsistencia, la crisis económica contribuyó a movilizar políticamente a las clases populares que con su participación dieron un contenido revolucionario más profundo a lo que en principio se esbozó como un simple pronunciamiento militar. Ese mayor impacto social y popular de la crisis agraria ha sido destacado por N. Sánchez Albornoz en un intento de aplicar en el caso español el esquema de articulación entre situación económico-social y con-mociones revolucionarias elaborado por el historiador Ernest Labrousse para las revoluciones francesas de 1789 y 1848¹⁶.

La sucesión de malas cosechas acompañada del consiguiente incremento de los precios del trigo que se produce a partir de 1866 pone al descubierto los problemas estructurales de una economía agraria tradicional. En Alicante, como en otras zonas del litoral mediterráneo, la crisis agraria tendrá una mayor repercusión por el déficit crónico de la producción cerealista, un aspecto destacado por el Ayuntamiento de la capital en su respuesta a la encuesta sobre las existencias de granos realizada por el gobernador en mayo de 1867:

«... en este distrito municipal no se cosecha más que cebada y ésta no abastece a cubrir el consumo del mismo ningún año, siendo destinada al pienso de las caballerías y por la misma razón no hay existencia. El consumo de trigo y cebada en este distrito está sujeto siempre a importación de otros puntos...».¹⁷

La libre importación de grano extranjero era la única solución para la crisis y el levantamiento de la prohibición que sobre ella pesaba desde 1824 había sido una petición reiterada con insistencia por determinados sectores sociales e instituciones políticas y económicas. La cuestión había sido tratada por la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Alicante en los meses de marzo y abril de 1866, cuando todavía la situación no revestía la gravedad que tendrá después. En estas sesiones se perfilaron dos posturas contrapuestas pues, mientras la sección comercial apoyaba francamente la disposición gubernamental que liberalizaba la entrada de grano foráneo mediante el pago de ciertos derechos argumentando que éstos protegían suficientemente la producción nacional, la sección de agricultura se oponía, porque esta medida sometía a los terratenientes cerealistas castellanos a una dura competencia. Podemos constatar así que un sector de la burguesía local –en el que figuraban los mayores hacendados de la provincia y algunos accionistas de la disuelta «Sociedad del ferrocarril Alicante-Almansa» como el Marqués de Rioflorado, Juan Vignau y José Gabriel Amérigo– rechazaba la libre importación de trigos y harinas, tratando de defender los intereses de la compañía ferroviaria asegurando el tradicional tráfico de cereales castellanos hacia el puerto alicantino.

16 SANCHEZ ALBORNOZ, «El transfondo económico...», p. 40.

17 Archivo Municipal de Alicante, Arm. 23, leg. ind. años 1866-1869, año 1867.

Pese a estas resistencias, las posiciones librecambistas mantenidas tradicionalmente por la mayor parte de la burguesía alicantina serán las que terminarán imponiéndose de nuevo¹⁸.

La supresión en agosto de 1867 del arancel prohibicionista que pesaba sobre la importación de granos no evitó la escasez; un año más tarde la crisis de subsistencias y el hambre eran una realidad. Esta fue la última crisis de este tipo que afectó al conjunto del país y puso al descubierto los problemas estructurales de la agricultura española y su desfase respecto a las economías europeas más desarrolladas¹⁹, aunque sus repercusiones no fuesen iguales en todo el territorio español.

Basándose en el comportamiento de los precios durante la crisis, Sánchez Albornoz ha elaborado una clasificación en cinco regiones económicas diferenciadas²⁰. La provincia de Alicante, encuadrada en una zona –correspondiente al litoral mediterráneo hasta Murcia– que presenta, en general, unos precios relativamente bajos por su posición periférica y la facilidad para importar cereal foráneo, mantuvo en ese período un precio mínimo del trigo sensiblemente superior al conjunto de la zona y uno de los más elevados de toda España aunque su precio máximo será menor con lo que la amplitud del alza fue más reducida que la de las restantes provincias. Algo similar ocurrió con la cebada, aunque en este caso los precios y el alza fueron menores y su diferencia con las otras provincias de la zona menos acusada²¹. No obstante, Alicante no quedó al margen de la crisis y el encarecimiento de las subsistencias, como podemos observar por el registro oficial de los precios medios del trigo y la cebada²², los dos productos básicos del consumo de las clases populares²³:

18 *Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Alicante. Resumen de sus trabajos durante el año 1866...*, Alicante, 1867, pp. 10-12.

19 Tras esta crisis, los períodos de carestía se mitigarían con el trigo ultramarino y con la lenta pero progresiva integración del mercado nacional a impulsos del desarrollo de la red ferroviaria. Sobre la agricultura de este período, vid. G. ANES, «La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: algunos problemas», en *Ensayos sobre economía española a mediados del siglo XIX*, Madrid, 1970, pp. 235-263.

20 SÁNCHEZ ALBORNOZ, «Geografía de los precios», en *España hace un siglo: una economía dual*, Madrid, 1977, pp. 81-98, p. 88 y ss.

21 *Ibid.*, p. 87.

22 Las únicas estadísticas de suministros y precios medios localizadas en la *Sec. de Suministros* del Archivo de la Diputación provincial son series incompletas e inservibles para un análisis completo del comportamiento de los precios durante el ciclo de crisis. Por ello hemos utilizado los datos del *Boletín de la Provincia* y los elaborados por Guillermo Seguí para los años 1866 y 1867, que no figuraban en la fuente anterior (Cfr. G. SEGUI MARCO, *Alicante y la fiebre amarilla de 1870*, Memoria de licenciatura inédita, Universidad de Alicante, s.a.). Algo similar sucede en el caso de Murcia, estudiado por J. B. VILAR, (*Bases sociales y económicas del Cantón murciano*, 2ª ed. Madrid. 1976. pp. 62-82), quien al estudiar las crisis cerealista de 1864-1867, cuya morfología recuerda a la alicantina, si bien en Murcia la carestía y el disparo de precios presentaron un ritmo más contenido, para la reconstrucción de series de producción, precios e importaciones de cereal recurre a fuentes manuscritas coetáneas, siempre incompletas, que completa con la información extraída del *Boletín de la Provincia* y de las síntesis estadísticas publicadas en la época por Fermín CABALLERO y José GARCÍA BARZANALLANA.

23 En 1848 la alimentación de estos sectores de la población consistía en «pan de trigo o cebada con algún arroz o legumbres cocidas». Cfr. J. ROCA DE TOGORES, «Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Alicante», en *Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas*, Madrid, VI, 1849.

Cuadro 1. Precios medios del trigo y la cebada en Alicante-Provincia y Alicante-partido judicial (Ptas.). Años 1866 a 1873-74.

AÑOS	TRIGO (HL.)		CEBADA (HL.)	
	Alicante Provincia	Alicante Partido Judicial	Alicante Provincia	Alicante Partido Judicial
1866	22'37	27'06	11'08	13'55
1867	29'05	26'99	13,04	10'81
1868/69	23'90	27'50	11'40	12'50
1869/70	22'69	23'39	10'35	9'71
1870/71	23'25	23'70	10'18	9'16
1871/72	23'05	24	9'83	9'32
1872/73	22'69	24'41	9'99	9'37
1873/74	23'56	24'01	10'59	9'12

FUENTE. Para los años 1866 y 1867 (años calendario, de enero a diciembre): SEGÚI MARCO, G., *Alicante y la fiebre amarilla de 1870*, Memoria de licenciatura, Universidad de Alicante, s.a., pp. 189-190 (Agradecemos al autor su amabilidad al facilitarnos estas cifras inéditas).

Para los años 1868-69 a 1873-74 (años agrícolas, de julio a junio): *Comisión de Estadística de la Riqueza Territorial*, B.O.P. 26, 27, 28 y 29 de agosto de 1879. Elaboración propia.

Por lo que hace referencia al trigo, la capital registró durante todo el período precios sensiblemente superiores a los del conjunto provincial, si exceptuamos el año 1867 en que el precio medio del hectólitro de trigo en el partido judicial fue 2'06 ptas. menor, probablemente como un mecanismo reflejo de las primeras llegadas de trigo ultramarino que dejaron sentir sus beneficiosos influjos en el área capitalina –por su condición de centro comprador y redistribuidor de cereales– y no en el resto de la provincia. Pero, si atendemos a la comparación entre precios mínimos y máximos, tendremos que para el intervalo de 1866 a 1868 –los tres años de mayor repercusión de la crisis–, de acuerdo con los datos ofrecidos por Guillermo Seguí, la amplitud del alza en el caso del trigo fue menor en la capital que en la provincia, mientras que la cebada presenta en la ciudad de Alicante una amplitud sensiblemente superior en razón de una fluctuación mayor de los precios²⁴.

En general, la capital se presenta como un área tradicional de precios altos, donde la especulación de los comerciantes tuvo que jugar un papel importante pues, como denunciaban las autoridades y la prensa local, se hacían acopios de granos retirándolos del mercado para maximizar los beneficios a costa del mantenimiento de precios elevados. Sin embargo, la facilidad en el abastecimiento procedente del exterior repercutía

24 En el caso del trigo, la amplitud del alza en la capital fue del 31% y en la provincia del 57%; para la cebada la amplitud del alza registrada en la capital fue del 72% frente al 46% registrado en el conjunto provincial. Cfr. G. SEGÚI MARCO, *Op. cit.*, p. 64.

en una menor oscilación de los precios y atenuaba los efectos de la crisis, aunque otros factores locales tendían a agudizarla.

En el invierno de 1867-1868 se evidencian las primeras consecuencias de la crisis de subsistencias con la escasez y el encarecimiento de los artículos de primera necesidad, así como los primeros efectos negativos: mortalidad invernal más acusada y descenso de la natalidad²⁵. Se fraguaba una coyuntura de deterioro máximo del nivel de vida con escasez y carestía de las subsistencias y la respuesta de los poderes públicos ante la crisis será la tradicional en estos casos²⁶. A mediados de enero de 1868, el gobernador, Perfecto Manuel de Olalde, instaba a los alcaldes de la provincia a tomar medidas contra la carestía con la creación de un fondo especial presupuestario, la instalación de tahonas de venta de pan a precios asequibles a las clases populares aunque se tratase de pan de «tercera calidad» y la organización de la caridad pública en contacto con los curas párrocos²⁷.

El primero en responder a este llamamiento fue el Ayuntamiento de la capital, que celebró diversas reuniones con el gobernador, los mayores contribuyentes y los panaderos, a fin de conseguir reducciones en los precios de venta del pan y, pese a su precario estado financiero, intentó poner en marcha un plan de obras municipales para emplear a los jornaleros parados pues «el trabajo es el mejor y más inmediatamente beneficioso medio de atender a las necesidades de las clases menos acomodadas»²⁸. De igual modo, otros Ayuntamientos de la provincia tomaron medidas para atenuar los efectos de la crisis y el Gobierno civil colaboró con ellos impulsando el establecimiento de depósitos públicos de harinas y trigos e incrementando las obras públicas en la provincia²⁹. Entre las medidas especiales que se tomaron en varios lugares de la provincia, destaca la organización en Castalla de una especie de montepío que recogía los trabajos de espartería de los jornaleros destinando el producto de su venta a la adquisición de cebada y centeno que se entregaba a los panaderos con el fin de que el pan resultase más barato.

Todas estas medidas, que se completaron con la acción caritativa organizada por el Obispado de Orihuela y algunas entidades de carácter benéfico y filantrópico, cumplían el doble objetivo, como señalaba la memoria del Gobierno civil, de «evitar la miseria y asegurar la tranquilidad de los honrados pueblos de esta provincia». De ahí las instruc-

25 GOZALVEZ PEREZ, *Op. cit.*, p. 165 y 169.

26 A. M. CALERO ha señalado los distintos tipos de acciones que por parte de los patronos y los poderes públicos se suelen ejercer en Andalucía ante una crisis de subsistencias. Todos ellos se aplicarán también en el caso que nos ocupa. Vid. *Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936)*, Madrid, 1976, p. 11.

27 Vid. «Memoria sobre gestiones hechas para facilitar trabajo y pan barato a las clases menesterosas. Alicante, 1868» en Archivo de la Diputación Provincial, *Sec. de Gobierno Civil*, leg. 43.

28 Archivo Municipal de Alicante, *Cabildos*, 20 y 25 de enero de 1868, y Arm. 36, *Policía Urbana*, año 1868.

29 En total, se empleó a 4.068 hombres en el plan de obras públicas del Estado, provinciales y municipales. Vid. «Memoria sobre gestiones...» (Vid. nota 27).

ciones del ministro de la Gobernación, González Bravo, con el fin de prevenir desórdenes y motines de subsistencias que podían alentar la conspiración revolucionaria:

«(Se) ha difundido entre la clase proletaria el temor de que coincidan a un mismo tiempo la falta de recursos para comprar el alimento más necesario y la carestía por causa de la escasez de este alimento. Por otra parte, se advierten señales inequívocas de los manejos que se emplean para dar una dirección revolucionaria a las preocupaciones que nacen de aquel temor...»³⁰.

En este sentido, ya se habían tomado medidas de excepción, rebajando las tasas de importación de todo tipo de granos extranjeros y prohibiendo la exportación de cereales y otros productos agrícolas. En los meses siguientes se exhortaba a las corporaciones locales a que fomentasen las obras públicas y a los particulares —en especial, a «las clases acomodadas, a quienes más que a nadie interesa»— a dar trabajo a los jornaleros parados. En ello coincidía también la burguesía alicantina, como demostraba el diario *El Comercio* en el siguiente comentario del 4 de marzo de 1868:

«la miseria trató de asomar su descarnado rostro entre nosotros pero debemos confesar que se han hecho todos los esfuerzos posibles por conjurarla, procurando dar a la clase jornalera medios de ganarse el sustento...».

Si las medidas preventivas no eran suficientes y el malestar social por la carestía y el hambre se traducían en motines u otro tipo de protestas populares, las órdenes de González Bravo no podían ser más enérgicas, que se reprimiesen con dureza. Entre las disposiciones de carácter represivo que se tomaron para evitar la conflictividad social, más acusada en las zonas rurales, destaca la creación de la denominada Guardia Rural que, con una fuerza en la provincia de unos trescientos hombres, tenía como misión «garantizar la propiedad rural»³¹.

Ahora bien, la crisis afectaba no sólo a los sectores de extracción más baja, sino a todo el conjunto social. El comercio sufría una evidente paralización y se incrementaban la especulación y el contrabando³², mientras los comerciantes locales argumentaban la necesidad de que se redujesen los derechos que gravaban la actividad mercantil y los precios de transporte por ferrocarril. Respecto a este último factor, aunque no podemos evaluarlo en su dimensión real al carecer de estudios sobre el particular, sí que es cierto

30 «Circular del ministerio de la Gobernación del 4 de marzo de 1868», *Gaceta de Madrid*, nº 65, 5 de marzo de 1868.

31 *El Comercio*, 3 de abril de 1869 y Archivo de la Diputación Provincial, *Sec. de Gobierno Civil*, leg. 44.

32 El diario *El Comercio* realiza constantes alusiones a la crisis comercial. Vid., por ejemplo, los números del 13 de marzo, 14 de abril y 5 de julio de 1868.

que los contemporáneos en sus análisis de la crisis introducían la situación de las compañías ferroviarias y los altos precios del transporte como un elemento de agudización de la depresión económica. Ya en julio de 1867 la Junta de Agricultura, Industria y Comercio señalaba como una de las causas de la postración comercial de la capital «el monopolio que ejercen las compañías de ferrocarril con el establecimiento de tarifas especiales a precios reducidos por medio de contratos con los particulares, para el transporte de mercancías, consiguiendo así apoderarse de todo el tráfico nacional y de las importaciones extranjeras...»³³.

Sin embargo, pese a la prórroga en la importación de grano foráneo que concedió el gobierno en el mes de junio de 1868 y la reducción en las tarifas de transporte de cereales que aplicó la compañía ferroviaria M.Z.A., el alza de los precios de las subsistencias se mantenía. Al paro de numerosos braceros agrícolas, se unía ahora por la parálisis comercial el de un gran número de jornaleros urbanos que trabajaban en el muelle y la capital acogía una numerosa población flotante de mendigos y emigrantes procedentes de los pueblos de la provincia y del interior de la península: «las tropas de pordioseros de Castilla, de La Mancha, de Andalucía y de todas las provincias las que invaden a toda hora las calles de la ciudad»³⁴. El crecimiento de la mendicidad urbana fue tan ostensible en los meses siguientes que obligó al nuevo Ayuntamiento nacido de la revolución a realizar una suscripción popular con el objeto de acabar con ella³⁵. En el mundo rural grupos de jornaleros hambrientos comienzan a recorrer los pueblos, configurando un cierto tipo de bandolerismo que enlaza después con las partidas armadas republicanas que, al agrupar parte del apoyo popular, tendrán un peso decisivo en el triunfo de la revolución del 68.

Ante esta situación de paro y miseria, los jornaleros alicantinos tuvieron de nuevo que afrontar la emigración al norte de África, Argel y Orán fundamentalmente, como la única solución que les restaba. Esta corriente migracional, que venía siendo tradicional entre los jornaleros alicantinos en épocas de crisis y carestía, se mantuvo a lo largo de todo el siglo XIX y sólo remitirá a comienzos de este siglo en beneficio de la emigración a tierras americanas³⁶. Una referencia documental de excepción sobre la importancia de la emigración alicantina a Argelia la encontramos en la correspondencia del

33 *Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Alicante. Resumen de sus trabajos durante el año 1867...*, Alicante, 1868, p. 13.

34 Cit. por V. RAMOS, *Crónica de la provincia de Alicante*, Alicante, 1979, p. 423.

35 *El Comercio*, 2 de febrero de 1869.

36 Sobre la emigración alicantina a la costa norteafricana, véase J. B. VILAR, «Los alicantinos en la Argelia francesa (1830-1914)», en *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea*, nº 1, 1982, pp. 127-161; VILAR, *Emigración española a Argelia (1830-1900). Colonización hispánica de la Argelia francesa*, Madrid, 1975, y VILAR, *Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914)*. Prólogo de J. M^o. JOVER. Madrid-Murcia. 1989.

Consulado francés en Alicante que da constancia de que esta tendencia persistió durante el sexenio democrático pues, en enero de 1870, el vice-cónsul francés, Bon de Chambad, sugiere a las autoridades francesas la conveniencia de establecer un servicio marítimo regular entre Alicante y las costas argelinas dadas las favorables previsiones de tráfico que se apuntan para ese año³⁷.

A partir del mes de mayo de 1868, la crisis se va a agudizar. De acuerdo con los datos ofrecidos por Guillermo Seguí, los precios medios mensuales de la cebada en la capital alcanzaron sus cotas más elevadas en los meses de abril a julio, mientras el trigo que mantiene un precio medio de 27'93 ptas. el hectólitro entre mayo y julio volverá a alcanzar las 30'63 ptas. en el mes de septiembre³⁸. En la coyuntura recesiva repercuten negativamente una serie de factores locales. A la falta de recursos municipales por el déficit presupuestario que se arrastraba desde la reforma tributaria de Mon en 1845 y venía agravándose desde 1860 limitando la capacidad operativa de los municipios frente a la crisis, se unía la escasez de agua potable. El abastecimiento de agua a la capital siempre había sido problemático, pero ahora, en coincidencia con la crisis de subsistencias, se va a producir una merma considerable de los caudales de los manantiales públicos Casa Blanca y Valladolid que venía a acentuar el malestar social derivado de la contracción económica.

2. Crisis, burguesía y clases populares.

Las motivaciones económicas de la revolución.

Se ha señalado al comienzo de este trabajo que la revolución del 68 nace directamente de una profunda crisis en la que se entrelazan el desgaste político de la monarquía isabelina y la recesión económica. Ha sido este segundo aspecto el objeto preferente de nuestra atención y, una vez descrita la morfología de la crisis en el caso que nos ocupa, analizaremos su influencia sobre los diferentes sectores sociales que van a participar en el movimiento septembrino y su contribución a la formación del bloque social que hizo posible la revolución.

Este bloque presenta una clara dualidad de fuerzas representadas por una burguesía que, en oposición al régimen isabelino, pretendía a través del tradicional mecanismo del pronunciamiento un mero cambio de gobierno y un movimiento de amplia base popular instrumentalizado por demócratas y republicanos. Esa dualidad social condiciona también la trayectoria del sexenio porque está en la base de las diversas alternativas que se ensayan en los seis años siguientes produciendo una permanente inestabilidad y, finalmente, el fracaso en 1874 de la experiencia democrática frente al conserva-

37 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, «Viceconsulat de France a Alicante. Direction des Consulats des Affaires Commerciales», Doc. n° 106, Alicante, 16 de janvier de 1870.

38 SEGÚI MARCO, *Op. cit.* p. 191.

durismo burgués. La crisis económica actuó sobre todos los sectores y clases sociales implicados en la revolución, no de igual forma, pero sí en el mismo sentido de motivarlos a participar activamente en la conspiración y los sucesos revolucionarios³⁹. Describamos a continuación cómo se realiza este proceso y cuáles son las motivaciones concretas que presenta cada grupo.

En primer lugar tenemos a la burguesía local –de la que un numeroso sector representa las nuevas realidades sociales ligadas a la expansión capitalista y más concretamente al desarrollo comercial de los años precedentes–, que se siente incómoda con el marco político isabelino al verse marginada de la escena política local⁴⁰. Además, esta burguesía, en consonancia con su vocación mercantil, discrepa profundamente de la política económica de marcado signo proteccionista alentada por los gobiernos de la monarquía. La burguesía alicantina venía manteniendo una actitud librecambista que se manifestó en las diversas coyunturas revolucionarias de la primera mitad del siglo XIX⁴¹. El desarrollo económico y comercial de los años cincuenta dio nuevos argumentos a los defensores del librecambismo y en el verano de 1862, aprovechando un viaje propagandístico de Segismundo Moret, se constituyó en la capital una sección de la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Comercio y comenzó a editarse el semanario *El Bostezo*, desde el que su director, Eleuterio Maisonnave –republicano y uno de los principales dirigentes de la conspiración de septiembre– se dedicará a popularizar la doctrina librecambista⁴².

Desde 1866 el clima recesivo se acentúa con la parálisis comercial, los crecidos impuestos portuarios y las trabas al libre tráfico, obligando a la burguesía local a oponerse con más rotundidad a las directrices económicas del gobierno. Así lo ponía de relieve la Junta de Agricultura, Industria y Comercio que en marzo de 1867 señalaba que el «decaimiento que se observaba en este puerto con grave perjuicio del comercio» era consecuencia de las trabas que limitaban la libertad individual en la vertiente económica y de la falta de una correcta planificación económica gubernamental⁴³.

39 J. Fontana ha destacado el papel de la crisis económica como motivación de los diversos sectores para participar en la revolución. Vid. *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*, Barcelona, 1973, pp. 103-104.

40 Si bien el censo electoral había sido modificado en 1865 rebajando las cuotas mínimas para la participación electoral a 200 rs. y ampliando el número de electores por capacidades (Cfr. MARTÍNEZ CUADRADO, M., «La elección general para Cortes Constituyentes de 1869», en *Revista de Estudios Políticos*, 1963, nº 132, pp. 65-101, p. 69), el censo confeccionado a finales de 1867 (*Boletín Oficial de la Provincia de Alicante*, 1 de enero de 1868) refleja la exclusión electoral de buena parte de la burguesía alicantina.

41 En 1844 durante la sublevación de Boné las demandas librecambistas de la burguesía comercial alicantina se recogen en las medidas tomadas por la Junta de Gobierno. Cuatro años después, en 1848, desde las páginas de la revista *La Aménidad* se publicaban de nuevo ardorosas defensas del librecambismo.

42 En octubre de 1868 la Junta Revolucionaria, de la que era secretario Maisonnave, proclamaba en su Declaración de Derechos la libertad comercial y tomaba las primeras disposiciones encaminadas al establecimiento del librecambismo.

43 *Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Alicante, Resumen de sus trabajos durante el año 1867*, Alicante, 1868, p. 8 y ss.

A medida que transcurrían los meses, la pasividad del gobierno ante el deterioro económico reforzó la actitud crítica de la burguesía alicantina. La situación se hizo más tensa con el incremento de las medidas impositivas que obligaron a los comerciantes, navieros y consignatarios a elevar una protesta contra la aplicación de la ley de derechos de puerto que recargaba onerosamente el tráfico mercantil⁴⁴. Exigían también una reforma arancelaria y la eliminación de aquellas trabas que limitaban el comercio interior. En marzo de 1868, el diario *El Comercio*, recogiendo las aspiraciones de la burguesía alicantina, abogaba desde sus páginas por la supresión de la aduana de Madrid:

«Después de todo, nosotros que repugnamos toda clase de restricciones comerciales, veríamos con gusto esas y todas las creaciones que vinieran a dar comodidad y libertad de acción al comercio (...) con nuestro actual sistema, cuyos absurdos derechos hacen del contrabando una especulación de enormes ganancias, y estimula a muchas gentes a lanzarse a él; la Aduana de Madrid, prestando facilidad al contrabando, ha de ocasionar inmensos perjuicios al comercio (...) constituye un monopolio del peor género, notoriamente ruinoso para los intereses comerciales del país».⁴⁵

Meses después, el mismo periódico se felicitaba por la supresión de la aduana y por las reformas que en la administración económica había introducido el gobierno revolucionario, expresando el grado de compromiso de la burguesía comercial alicantina con la revolución y su programa económico: «... Si los españoles acertaran a tener juicio y lográramos consolidar tranquilamente nuestras libertades, los gérmenes de prosperidad que España encierra se desenvolverán de tal modo que dentro de pocos años se desconocería por completo el país»⁴⁶.

En los albores de la revolución no sólo los comerciantes daban muestras de descontento, otras fracciones de la burguesía local denotan también un agudo malestar. Este sería el caso de los propietarios agrarios de la Huerta de Alicante y otras zonas de la provincia dedicadas fundamentalmente a cultivos de exportación a los que afecta asimismo la recesión comercial y el proteccionismo, el clima de inseguridad que se respira en los campos por la actuación de gavillas de jornaleros hambrientos pese a la implantación de la Guardia Rural, y el incremento de la contribución territorial⁴⁷. Por ello, no es extraño que en esta coyuntura comiencen a tomar cuerpo las primeras inicia-

44 *El Comercio*, 15 y 18 de julio de 1868.

45 *Ibid.*, 21 de marzo de 1868.

46 *Ibid.*, 3 de diciembre de 1868.

47 *Ibid.*, 22 de julio de 1868.

tivas de agrupación de terratenientes y agricultores como la *Asociación de Vinicultores de la provincia de Alicante*⁴⁸.

La actitud anticentralista de la burguesía alicantina constituye también un factor de desafección al régimen isabelino, pues supone una crítica a una monarquía que se sustenta en una centralización política y administrativa que, para la burguesía alicantina y otras burguesías periféricas, es la causa de los males que asolan al país y de los defectos que adolece el sistema político y la administración del Estado. El rechazo al centralismo se realiza desde planteamientos políticos, pero tiene además una clara lectura económica –y en este sentido, se ve acentuado también por la crisis– que refleja el diario *El Comercio* en su artículo «Madrid y las provincias», oponiendo la imagen de unas provincias –periferia– ricas y dinámicas frente a un Madrid –centro político y administrativo– expoliador y opresor como causa del atraso económico de España con respecto a los países europeos desarrollados e industriales⁴⁹. Sin embargo, no podemos confundir en ningún caso esta actitud con un sentimiento nacionalista, aunque en otras zonas del territorio español sí que esté presente en el nacimiento del nacionalismo y los movimientos regionalistas. En Alicante nunca rebasará los límites de la crítica a la excesiva centralización desde actitudes provincialistas, si bien este factor ayuda a explicar el arraigo del republicanismo y de la doctrina federal en ciertos sectores de la burguesía local tras la revolución del 68.

Los artesanos, el incipiente proletariado urbano, los jornaleros y los pequeños campesinos integran el otro gran sector implicado en la revolución del 68. Ellos son la base del movimiento revolucionario popular que, junto a la burguesía que se decanta hacia el cambio político, fue necesario para que en 1868 fuese derrocada la monarquía y se abriese un nuevo período constitucional. Su motivación revolucionaria viene dada fundamentalmente por la recesión económica que repercute en ellos de forma más dramática. La carestía, el alza de los precios, el paro y subempleo creciente de estos grupos, las medidas fiscales indirectas –los consumos– y el sistema de levas y quintas militares son los factores que inducen a la participación de los sectores populares urbanos en el movimiento de septiembre con un programa social incoherente y asistemático si se quiere, pero con un alto componente reivindicativo que desborda los objetivos moderados de la burguesía dirigente dando, en definitiva, a los contenidos sociales y políticos del bloque revolucionario un alcance mayor del previsto inicialmente.

Las reivindicaciones populares se polarizan en torno a dos objetivos: la supresión de las quintas y la abolición de los consumos. Aunque se muestran partidarios de reformas como el reconocimiento de los derechos y libertades y el sufragio universal, los

48 *Ibid.*, 4 de marzo de 1868.

49 *Ibid.*, 19 de septiembre de 1868.

objetivos políticos son menos concretos para ellos que las demandas económicas. Las implicaciones económicas del impuesto de consumos son obvias; singularmente odioso para estos sectores populares por lo gravoso de su aplicación, lo era mucho más en una coyuntura de crisis al encarecer las subsistencias. Por otra parte, no podemos olvidar que la abolición de las quintas contemplaba indirectamente una demanda económica pues el tener que enviar a los hijos al servicio militar suponía un grave quebranto —mucho más en época de crisis— en la ya de por sí precaria economía familiar.

Del mismo modo, un sector del campesinado se sentirá atraído por la revolución. Al malestar de la población rural que el capitalismo había, en parte, proletarizado, se suma el del pequeño campesinado propietario agobiado por la crisis, que disminuía su ya escasa capacidad económica poniéndole en manos de prestamistas y usureros⁵⁰. El descontento campesino se expresará en esta coyuntura en la adopción de dos posturas opuestas pero que, pese a su divergencia ideológica, patentizan una crítica a la forma en que se realizó la revolución liberal y al desarrollo de un cierto tipo de capitalismo agrario: el republicanismismo y el carlismo. En esos años partidas carlistas y republicanas recorrerán los campos alicantinos actuando en numerosas ocasiones en perfecta connivencia⁵¹.

Mención aparte merece ese amplio sector social que podríamos calificar de pequeña burguesía urbana ligada al comercio minorista y a algunas actividades artesanales muy extendidas en la capital y los pueblos más grandes de la provincia. Estos sectores jugaron un papel importante en el movimiento septembrino y serán uno de los principales frentes de formación del Partido Republicano. Aspiraban a integrarse en el nuevo sistema social y se ven afectados directamente por la crisis económica —que limita su capacidad de ahorro y su poder adquisitivo— y por la creciente presión fiscal estatal, provincial y municipal⁵². Insatisfechos económica y políticamente, estos sectores de la pequeña burguesía urbana reclaman un parlamentarismo de amplia base electoral y coinciden con otros grupos en sus reivindicaciones económicas: desaparición de los monopolios

50 La descapitalización de los campesinos y el crédito agrícola eran un tema preocupante en esos años. En 1861 surgió la iniciativa de creación de un Banco agrícola para evitar el recurso al crédito privado y a la usura por parte del pequeño y mediano campesinado, pero no llegó a ponerse en práctica, bien por la debilidad financiera de los grupos de la burguesía local que estaban detrás, bien por la coyuntura recesiva que se inaugura en los años siguientes. (Vid. Archivo de la Diputación Provincial, *Sec. de Fomento*, leg. 501 y *Proyecto de estatutos del Banco agrícola de la provincia de Alicante*, Alicante, 1861). En general sobre estas cuestiones, vid. V. CONEJERO MARTÍNEZ, «Limitaciones económicas del campesinado alicantino y su recurso al crédito privado durante el siglo XIX», en *Anales de la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea*, nº 3-4, 1984-1985, pp. 101-113.

51 Sobre el origen del carlismo en el sur del País Valenciano y su relación con la revolución liberal burguesa, vid. J. MILLÁN, *Rentistas y campesinos*, Alicante, 1984.

52 *El Comercio*, 22 de julio de 1868.

económicos y reforma tributaria con la abolición de los impuestos indirectos y el establecimiento de una contribución directa y progresiva. A estas demandas se adhería asimismo un importante sector de la burocracia administrativa asentada en la capital pues el déficit y la insolvencia de la hacienda estatal, municipal y provincial y el sistema de cesantías creaba en ella un clima de inseguridad profesional mientras la crisis económica recortaba sus ingresos.

Todos estos sectores y clases sociales se unirán en septiembre de 1868 para derrocar la monarquía de Isabel II y el sistema político moderado. Resulta indudable que, como hemos podido comprobar en el caso de Alicante, la crisis económica los motivó en ese sentido y contribuyó decisivamente a crear el clima de agitación social en el que se gestó la revolución de 1868. Sin embargo, no acaba aquí su influencia pues, como ya apuntó en su momento N. Sánchez Albornoz, la existencia de una recesión condicionó la propia evolución del sexenio y no favoreció la consolidación de la experiencia democrática⁵³.

53 SÁNCHEZ ALBORNOZ, *España hace un siglo...*, p. 98.